

A M I C U S C U R I A E

que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

de los Estados Unidos Mexicanos

por

[REDACTED]

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Amparo en revisión 1115/2017

a) Personas que suscriben el este *Amicus Curiae*

I. [REDACTED]

b) Sustento legal para la presentación del *Amicus Curiae*.

- II. Comparecemos ante esta **SCJN** de manera respetuosa con la finalidad de presentar este *Amicus Curiae* y que sea considerado el contenido del mismo en ejercicio de nuestro derecho de petición previsto en el artículo 1º y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (**CPEUM**), así como de nuestro derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa, conforme al artículo 23.1, inciso a) de la Convención Americana de Derechos Humanos (**CADH**).

c) Objetivo.

- III. El objetivo del presente *Amicus Curiae* es informar a la **SCJN** del panorama actual al que la sociedad se enfrenta como consecuencia de una legislación absolutamente prohibitiva.
- IV. El legislador a través de su producción normativa ha sobredimensionado el consumo de cannabis como problema de orden y salud pública al punto que las penas que se han otorgado a las diversas actividades relacionadas con el consumo del cannabis son evidentemente desproporcionadas considerando la invasión a derechos fundamentales, los bienes jurídicos resguardados y la efectividad para tutelar estos bienes jurídicos.
- V. Al día de hoy, en México, las leyes que criminalizan y estigmatizan a toda persona que realice actividades relacionadas con el consumo de drogas han generado el aumento de la población penitenciaria sin disminuir tanto el comercio como el consumo de las mismas. Como consecuencia, el legislador ha rebasado los límites constitucionales con leyes desproporcionadas que no cumplen con su propósito.

d) Principio de proporcionalidad en la CPEUM.

- VI. La tarea del legislador como consecuencia de sus actividades de creación normativa que le fueron encomendadas por mandato constitucional conlleva un amplio margen de libertad configuradora para crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados.
- VII. Para llevar a cabo lo anterior, es necesaria la apreciación, análisis y ponderación de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado social.
- VIII. En el caso concreto de la materia penal, el legislativo se encuentra facultado para emitir leyes que inciden en los derechos fundamentales de los gobernados, a través de las penas necesarias para salvaguardar diversos bienes constitucionales que la sociedad considera valiosos, por ejemplo la vida, salud, propiedad, orden público.
- IX. Sin embargo, como lo ha sostenido este Alto Tribunal, las facultades del legislador no son ilimitadas, la legislación debe ser sometida a control constitucional y contar con los siguientes elementos¹: (a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; (b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; (c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado, y (d) estar justificada en razones constitucionales.
- X. Como consecuencia, existe una obligación por parte del legislador de actuar de forma medida y no excesiva al momento de emitir normatividad, particularmente en materia penal, debido a que de acuerdo con el principio de legalidad, se encuentra impedido para actuar de forma arbitraria y en exceso de poder.
- XI. En esta materia, el legislador tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal de acuerdo a las necesidades sociales del momento histórico respectivo: (a) los bienes jurídicamente tutelados; (b) las sanciones penales, y (c) las conductas típicas antijurídicas.
- XII. Como consecuencia, al configurar leyes penales, debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales: (a) proporcionalidad; (b) razonabilidad jurídica (penas no infamantes, crueles, excesivas, inusitadas, trascendentales), y (c) no penalidades contrarias a la dignidad del ser humano².
- XIII. Debido a la ausencia del establecimiento de límites concretos establecidos por la CPEUM, se ha convertido en responsabilidad de esta SCJN el determinar los criterios y condiciones en que se actualiza que una sanción impuesta por el legislador no cumpla con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

¹ No. Registro: 170,740. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVI, Diciembre de 2007. Tesis: P./J. 130/2007. Página: 8

² De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22.

- XIV. Es importante señalar que este Alto Tribunal, a partir de un método de aproximación sucesiva, se encuentra autorizada para definir el contenido de los preceptos de la CPEUM³ ya que la jurisprudencia constitucional que se emite es del interés directo de todos los gobernados, a quienes se les debe otorgar certeza sobre los límites constitucionales de la actuación pública.
- XV. Derivado de lo antes expuesto, procedemos a realizar un análisis sobre cada uno de los criterios que deben ser satisfechos para estimar un actuar proporcionado por parte de la autoridad:

e) Persecución de finalidades legítimas desde la óptica constitucional

- XVI. El legislador en el Diario de los Debates del texto original de la Ley General de Salud⁴ estimó en su artículo 235 que la medida adecuada para proteger a la población de los efectos de "estupefacientes", categoría en la que se ubica la Cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas⁵; era promover la prohibición absoluta⁶ de: "la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga..."
- XVII. Actualmente, bajo la consigna de proteger la salud de la población y en general el orden público, el legislador ha creado todo un sistema punitivo que involucra a los siguientes ordenamientos: (a) Ley General de Salud; (b) Código Penal Federal, (c) Código Federal de Procedimientos Penales
- XVIII. Es de suma relevancia hacer énfasis que todo mandato del legislativo culmina en la configuración de un delito –aunque exista la obligación de no acción penal para el Ministerio Público en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma-, lo que se traduce en **privación de la libertad** y como excepción tratamiento de farmacodependencia, mismo que puede llegar a ser obligatorio.⁷
- XIX. De lo anterior podemos concluir dos aspectos generales:
- a. Para el legislador desde 1984 las actividades relacionadas con el Cannabis representan un riesgo tan grande para la salud y para el orden público que quien las realice merece se disminuyan sus derechos de libertad, como consecuencia es necesario enviar a estos delincuentes a la cárcel o a recibir tratamiento.

³ Deliberaciones públicas (9 y 11 de mayo de 2006) llevadas a cabo a propósito de la Acción de Inconstitucionalidad 25/2004, promovida por el Procurador General de la República en contra del Congreso y del Gobernador del Estado de Nuevo León, demandando la invalidez del Decreto número 108, publicado en el Periódico Oficial estatal el 14 de julio de 2004, por el que se adicionaron la fracción VII del artículo 10 y los artículos 11 Bis y 13, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública; se reformaron y adicionaron los artículos 39, del Código de Procedimientos Civiles, 29, del Código de Procedimientos Penales y 22, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa, todos del Estado de Nuevo León.

⁴ Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19831215 - Número de Diario 37

⁵ Artículo 234

⁶ Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bacteatum y erythroxylon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas o preparaciones."

⁷ Artículo 193 Bis.- Cuando el centro o institución reciba reporte del no ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 478 de esta Ley, las autoridades de salud deberán citar al farmacodependiente o consumidor, a efecto de proporcionarle orientación y conminarlo a tomar parte en los programas contra la farmacodependencia o en aquellos preventivos de la misma. Al tercer reporte del Ministerio Público el tratamiento del farmacodependiente será obligatorio

- b. Para el legislador toda actividad relacionada con el Cannabis es una actividad problemática, por lo que es imposible realizar la "siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con el Cannabis sin que sea un problema "especialmente grave para la salud pública".
- c. Para el legislador si se es un consumidor que posee menos de la cantidad señalada en la tabla en el artículo 479 de la Ley General de Salud (5gr para el caso de cannabis) no representa un peligro tan grande para la sociedad, pero sí lo suficientemente peligroso como para que el Ministerio Público de aviso a la "autoridad sanitaria" de la conducta realizada, para que al tercer reporte el consumidor sea sometido a un "tratamiento obligatorio", es decir una intromisión directa por parte del estado.

XX. De esta manera el legislador ha optado por el sistema más invasivo, utilizando toda la capacidad del aparato coercitivo del estado, limitando desde su esfera de competencias un número considerable de derechos humanos con la finalidad de proteger nuestro derecho a la salud y el orden público.

XXI. A continuación, procederemos a realizar un análisis sobre la pertinencia de la medida punitiva en cuestión con la finalidad de alcanzar los fines antes descritos:

f) Adecuación, idoneidad y aptitud.

XXII. Esta descripción involucra tres aspectos que se encuentran íntimamente relacionados, la medida adoptada por el legislador debe prever :

- a. **Adecuación.** Implica el análisis de los elementos que se tomarán en cuenta para la creación de leyes con la finalidad de concluir si esta responde a las necesidades que en un principio impulsaron a crear la ley.
- b. **Idoneidad.** Presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador.⁸
- c. **Aptitud.** Debe servir para determinada actividad, función o servicio.

XXIII. Por lo tanto el grupo de disposiciones que realizan la prohibición absoluta de cualquier actividad relacionada con el cannabis antes descritas - siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con el Cannabis- en este punto deben demostrar que son las adecuadas de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentra la sociedad, son óptimas para cumplir el fin para el que fueron creadas y además de manera exitosa.

XXIV. Esta política de punibilidad se encuentra construida bajo supuestos consolidados desde el siglo XVII y que han evolucionado hasta culminar en la creencia de que el encarcelamiento tiene las siguientes funciones⁹:

⁸ Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de noviembre de 2015.

⁹ Linde, Luis M., and Imprimir Comentarios. "Nº 48-Varia ¿Populismo punitivo o reclamación razonable? La cadena perpetua: principios utilitarios y análisis económico".

- a. "las penas sirven para *"disuadir"* a las personas que ya han delinquido de volver a incumplir la ley, o a las que han pensado en delinquir de incumplirla por primera vez; esta función utilitaria también puede atribuirse, desde luego, a las penas impuestas según el principio retributivo, con independencia de si esa era, o no, su intención;
 - b. las penas sirven para *"prevenir"* la comisión de delitos, es decir, para aumentar el número de ciudadanos que desean cumplir la ley y nunca se han planteado no hacerlo;
 - c. las penas de cárcel sirven para *"aislar"* a los delincuentes del resto de la sociedad, anulando o disminuyendo su capacidad para cometer más delitos; es obvio que la pena de muerte consigue ese aislamiento en grado definitivo e insuperable, pero queda fuera de todo el argumento;
 - d. las penas sirven para *"reeducar"* a los delincuentes y hacer posible su *"reinserción"* social."
- XXV. Sin embargo, *Estudios comparativos de las leyes de drogas de todo el mundo no muestran un vínculo entre la aplicación de medidas punitivas y niveles más bajos*^{10/11}. Por lo tanto, queda en tela de juicio de que la medida en cuestión sea la indicada para combatir el problema de Salud Pública que podría significar las actividades relacionadas con el consumo de Cannabis.
- XXVI. Por otra parte, la experiencia internacional nos ha demostrado que la ausencia de medidas punitivas no ha elevado el consumo del cannabis, por ejemplo en los Países Bajos, donde la posesión y suministro al por menor de cannabis es legal en la práctica, las tasas de consumo de cannabis son casi las mismas que el promedio europeo¹².
- XXVII. Portugal despenalizó la posesión de todas las drogas en 2001 y el consumo de drogas no se elevó drásticamente como algunos temían. Más de diez años después, los niveles de consumo de drogas se mantienen por debajo del promedio europeo.¹³
- XXVIII. En el caso de sustancias que son legales y que han demostrado disminuir su consumo a través de la educación sanitaria una estricta regulación del mercado encontramos al tabaco. Esta sustancia, en algunos países, incluso ha logrado una disminución cercana al 50% de los consumidores en un periodo de 30 años.¹⁴
- XXIX. Esta experiencia nos lleva a replantear la idoneidad sobre la política absolutamente prohibicionista y punitiva para ser la mejor manera de tutelar el Derecho y el orden a la Salud, sin embargo aún resta analizar la susceptibilidad de alcanzar su fin.

¹⁰ Degenhardt, L. et al. (2008) "Toward a Global View of Alcohol, Tobacco, Cannabis, and Cocaine Use: Findings from the WHO World Mental Health Surveys", PLoS Medicine, vol. 5, no. 7. <http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.0050141> Consultado el 9 de febrero de 2017

¹¹ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2011a) "Looking for a relationship between penalties and cannabis use". <http://www.emcdda.europa.eu/online/annual-report/2011/boxes/p45> Consultado el 9 de febrero de 2017.

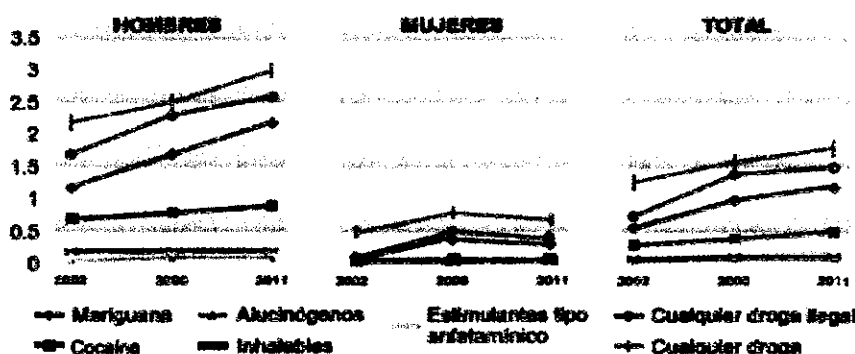
¹² European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (2013) "Prevalence maps — prevalence of drug use in Europe". <http://www.emcdda.europa.eu/countries/prevalence-maps> Consultado el 9 de febrero de 2017

¹³ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2011b) "Drug policy profiles — Portugal", p. 20. <http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-policy-profiles/portugal> Consultado el 9 de febrero de 2017.

¹⁴ Por ejemplo, la tasa de fumadores adultos en Inglaterra fue de 20% en 2010, frente al 39% en 1980. Health and Social Care Information Centre (2013) "Statistics on Smoking: England, 2013". <http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB11454/smok-eng-2013-rep.pdf> Consultada el 9 de febrero de 2017.

g) Susceptibilidad para alcanzar su fin

- XXX. Las medidas que sancionan con penas privativas de libertad toda actividad relacionada con el Cannabis han estado vigentes desde hace más de un siglo y actualmente no existen estudios que corroboren que dichas medida han cumplido su finalidad de tutelar el derecho a la salud o por lo menos, demostrar una tendencia clara a la disminución de su consumo.
- XXXI. Por el contrario, las estadísticas oficiales demuestran que el consumo se ha elevado no sólo respecto el Cannabis, sino otras drogas cuya peligrosidad y daños a la salud son mayores:

Tendencias en el consumo de drogas en personas entre 12 y 65 años¹⁵.

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011. Gráfica aproximada a datos proporcionados por el Cuadro 1 de la ENA 2011. Los datos de crack están contenidos en las cifras de cocaína.

h) Necesidad suficiente para ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin que exista una interferencia excesiva o injustificada por el gobierno.

- XXXII. En el apartado anterior quedó claro que no existe evidencia suficiente para demostrar que la actual política diseñada por el legislador en torno a toda actividad relacionada con el Cannabis cumple con la función encomendada por el legislador.
- XXXIII. Las cifras arrojadas por las autoridades son alarmantes debido a que el nivel de intromisión de los derechos fundamentales de los gobernados por las conductas poco problemáticas en materia de salud individual o pública: consumo o posesión.
- XXXIV. Estas conductas no se encuentran acompañadas de algún otro delito o algún tipo de conducta violenta, lo que significa que el estado ha activado su aparato coercitivo en contra de gobernados que, haciendo uso de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, fueron denunciados debido al consumo o la posesión simple de una sustancia que por sí misma (esto quiere decir que por el simple hecho de poseerla sin realizar alguna acción adicional) no genera ningún tipo de peligro para la sociedad (como podría serlo el poseer material radioactivo, por ejemplo).

¹⁵ Atuesta Becerra Laura H, "La política de drogas en México 2006-2012: análisis y resultados de una política prohibicionista". Cuadernos de Trabajo del Seminario de Política de Drogas 12, CIDE (2014). P. 22

Incidencia delictiva en delitos contra la salud (2006-2014)¹⁶

	175,993 (Ciento setenta y cinco mil novecientos noventa y tres)
	156,189 (Ciento cincuenta y seis mil ciento ochenta y nueve)
	453,069 (Cuatrocientas cincuenta y tres mil sesenta y nueve)

- XXXV. De la tabla anterior, podemos concluir que el 73.3% de las personas detenidas a nivel federal por delitos de drogas entre esos años eran poseedoras o consumidoras de alguna sustancia ilícita.¹⁷
- XXXVI. De igual manera, existen registros de violaciones sistemáticas a derechos humanos como consecuencia de la política actualmente instrumentada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones de la CNDH por dependencia y tipo de violación (selección) (2007 a 2012)^{18,19}

	PROCURADURÍA GENERAL DE LA DEFENSA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	FUERZA ARMADA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	GUARDIA NACIONAL
Privación de la vida	29 (32%)	7 (44%)	2 (17%)	6 (29%)
Detención arbitraria	51 (57%)	5 (30%)	3 (17%)	2 (10%)
Retención ilegal	43 (48%)	5 (31%)	1 (8%)	3 (14%)
Desaparición forzosa	3 (3%)	2 (12%)	0 (0%)	1 (5%)
Tortura	51 (57%)	9 (56%)	1 (8%)	10 (48%)
Tratos crueles o inhumanos	19 (21%)	5 (31%)	2 (17%)	5 (23%)
Uso de la fuerza	20 (22%)	5 (31%)	0 (0%)	5 (24%)
Intimidación	15 (17%)	2 (12%)	1 (8%)	1 (5%)
Cateo ilegal	20 (22%)	4 (25%)	0 (0%)	2 (10%)

- XXXVII. Adicionalmente, algunos de los derechos que se ven mermados de manera directa por esta política plasmada en normatividad prohibitiva son los siguientes:

¹⁶ Solicitud de información vía Infomex, PGR, folio 0001700072215.

¹⁷ Pérez Correa, Catalina y Romero Vadillo, Jorge Javier, Revista Nexos, 1 de Abril de 2016, disponible en: <http://www.nexos.com.mx/?p=28051#fn3> (Consultado el 04 de Abril de 2017=

¹⁸ Idem P. 19

¹⁹ Los porcentajes entre paréntesis denotan el porcentaje de las recomendaciones sobre cada tipo violación con relación al total de recomendaciones hechas a cada dependencia entre 2007 y 2012. Una misma recomendación puede referirse a distintas violaciones a derechos humanos.

Libertad de religión y libertad de conciencia

- XXXVIII. Existen comunidades que se encuentran directamente relacionadas con el consumo del cannabis y le otorgan un carácter espiritual equiparable con la meditación, un ejemplo es el movimiento Rastafari.
- XXXIX. En nuestro país se le ha negado el registro como asociación religiosa por parte de la Secretaría de Gobernación a esta comunidad, a pesar de descender directamente del Judaísmo y del Cristianismo, debido a que dentro de sus principales dogmas se predica el uso sacramental del Ganja.²⁰
- XL. Dentro de los postulados filosóficos postulan que el Ganja es una planta que se siembra, germina, crece y da sus frutos, es una creación en la que está implicado Dios Todopoderoso y la defienden como una creación divina, que no puede estar sujeta a las leyes del hombre, sino a las leyes naturales, al igual que el hombre. Citando a la biblia: "Cualquier ser humano tiene derecho a que en su hogar, en la tierra que habita, siembre lo que necesite para alimentarse y sanarse, corporal, espiritual y mentalmente"²¹.
- XLI. Para llevar a cabo esta actividad sagrada, la comunidad Rastafari encuadraría en los tipos penales de las actividades prohibidas relacionadas con el Cannabis, incluso en intercambio gratuito del producto de su cosecha, debido a su creencia de que es inmoral realizar el cobro por esta planta sagrada.
- XLII. La comunidad Rastafari es solo un ejemplo, tal vez el más explícito, en el que existe una afectación directa a la Libertad de Religión con motivos de salvaguardar la Salud Pública. Sin embargo ante el panorama de ser una normatividad que no cumple con su finalidad esta serie de disposiciones –como lo expusimos en párrafos anteriores- es importante señalar que existe una carga injustificada para el gobernado.
- XLIII. La actual prohibición podría equipararse a una normatividad en la que se prohibiera de manera absoluta toda actividad relacionada con el alcohol en los términos que actualmente se encuentran las actividades relacionadas con el cannabis. Esto representaría un perjuicio personal y directo al derecho de libertad religiosa para la comunidad Cristiana, toda vez que el vino es sustancia que tiene un carácter divino al ser equiparado con la sangre de cristo por esta religión.
- XLIV. Al respecto es importante señalar que el alcohol representa actualmente un problema de salud pública a nivel mundial con cifras reales exponencialmente más dañinos para el ser humano en comparación con el cannabis y no se encuentra prohibido:
- a. Cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones.
 - b. El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos.

²⁰ Ganjah, término usado por los rastafari para llamar a la marihuana (Cannabis Sativa).

²¹ Salmos (104:14)

- c. En general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en función de la discapacidad (EVAD).
- d. El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol.
- e. Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos.
- f. Recientemente se han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo y la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/sida
- g. Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto.²²

Derecho al Debido Proceso

- XLV. Como consecuencia de la implementación de la política prohibitiva en nuestro país se ha debilitado el Debido Proceso. El ejemplo más claro y alarmante es la constitucionalización de la figura el arraigo, existen cifras proporcionadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos que evidencia el sometimiento de siete mil novecientos ochenta y cuatro personas a arraigo y la liberación de únicamente cuatrocientas sesenta y cuatro.²³
- XLVI. Esta figura se ha sido declarada inconstitucional por violar diversos derechos humanos por parte del pleno de este Alto Tribunal durante la novena época, concretamente por violar de manera directa el contenido de los artículos 16, 18, 19, 20 Y 21, así como la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de la CPEUM Federal.²⁴
- XLVII. Lo alarmante es que derivado de la reforma Constitucional penal del 2008, se inserta la figura del arraigo directamente en el texto de la CPEUM (sin tocar los derechos con los cuales se había considerado que era incompatible).²⁵ Como consecuencia esta Suprema Corte se ha visto obligada a tolerar y declarar constitucional un régimen que en este recinto se había determinado violatorio de derechos humanos y forzándonos a los gobernados a vivir en un régimen de incertidumbre que debilita dramáticamente la garantía de Debido Proceso.
- XLVIII. Es importante señalar que durante el sexenio que se concreta la reforma antes mencionada (2006 a 2012) se involucró a los integrantes de las instituciones militares en labores de seguridad. El resultado fue el aumento significativo en violaciones a derechos humanos, toda vez que antes de "2006 los militares golpearon o maltrataron a los detenidos en 23% de los casos en donde ellos llevaron a cabo

²² Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud 2014.

²³ La Redacción, Revista Proceso, 14 de Octubre de 2013

²⁴ Acción de Inconstitucionalidad 20/2003. Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua. 19 de septiembre de 2005. Mayoría de cinco votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Angulano, Sergio A. Vallis Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Víctor Miguel Bravo Melgoza.

²⁵ Madrazo, Alejandro. "Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas: una primera aproximación (desde México)." Cuadernos de Trabajo del Seminario de Política de Drogas 12 (2014).

la detención, mientras que durante el sexenio de Calderón el porcentaje de detenidos por el Ejército que reportaron ser violentados aumentó a 78%.²⁶

- XLIX. Adicionalmente, la agresividad de las autoridades se ha centrado de manera significativa en los detenidos por delitos relacionados con drogas, particularmente entre los años 2006 y 2012 como se muestra en la siguiente tabla.²⁷

TABLA

Maltrato de las autoridades según delito

	Antes de Calderón	Durante Calderón	Antes de Calderón	Durante Calderón	Antes de Calderón	Durante Calderón
Patear	5.56%	2.79%	7.11%	1.27%	10.66%	37.31%
Asfixiar	6.35%	3.09%	8.49%	1.54%	9.27%	37.45%
Toques eléctricos	6.06%	1.82%	6.67%	1.21%	7.88%	44.85%

Fuente: Encuesta a Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal, 2012, CIOE.

- L. Por ejemplo, mientras en años anteriores dos de cada 100 detenidos por secuestro sufrieron toques eléctricos, en el caso de delitos contra la salud fueron casi 45. Sobre el arraigo y las detenciones en las que se han realizado actos de tortura se han pronunciado organismos internacionales (OEA y ONU)²⁸, sin que estas hayan sido atendidas al día de hoy.

Derecho de propiedad

- LI. Otra consecuencia que fue fruto de la reforma de 2008 en materia penal es la contenida en el artículo 22 de la CPEUM referente a la extinción de dominio.
- LII. Mediante esta figura se le permite a la autoridad extinguir el dominio de los bienes de las personas si considera que han sido "instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal..." en los casos de delincuencia organizada y, expresamente, de todos los delitos contra la salud (aun cuando no se hayan cometido mediante la participación en la delincuencia organizada).²⁹
- LIII. Esto representa una intromisión violenta y directa al derecho de propiedad, al debido proceso y a la presunción de inocencia al ser únicamente necesario un procedimiento paralelo a la Litis penal del delito en cuestión para privar de la posesión de un bien a un gobernado. Una vez más, esta intromisión es ocasionada por la configuración normativa que realizó el legislador con la finalidad de tutelar el derecho a la salud mediante la prohibición absoluta de toda actividad relacionada con el cannabis.

²⁶ Magaloni, Ana Laura y Magaloni Beatriz, "Un método de investigación llamado tortura", Nexos 01 de Marzo de 2016, disponible en <http://www.nexos.com.mx/?p=27781#fn5> (consultado el 31 de Marzo de 2017)

²⁷ Idem

²⁸ Anaya Muñoz Alejandro, "Violaciones a los derechos humanos en el marco de la estrategia militarizada de lucha contra el narcotráfico en México". Cuadernos de Trabajo del Seminario de Política de Drogas 12, CIDE (2014). P. 22

²⁹ Madrazo, Alejandro. "El impacto de la política de drogas 2006-2012 en la legislación federal" Cuadernos de Trabajo del Seminario de Política de Drogas 07 (2014). P.14

Derecho al libre desarrollo de la personalidad

- LIV. El derecho al libre desarrollo de la personalidad ha sido definido y delimitado por este Alto Tribunal vía jurisprudencial, en la que se reconoce la existencia de una dimensión externa y una interna del mismo.³⁰

- LV. "Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal."³¹

- LVI. En ese sentido, una prohibición absoluta por parte del estado a cualquier actividad representa un menoscabo sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad tanto de manera interna como de manera externa.

- LVII. La pregunta que surge es si esta intromisión por parte del legislador a la privacidad de los gobernados se encuentra debidamente justificada con la finalidad de salvaguardar el derecho a la salud y el orden público.

- LVIII. Al respecto, la Primera Sala de esta SCJN estimó que los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en relación con la producción, uso y autoconsumo del estupefaciente "cannabis" y el psicotrópico "THC", en conjunto conocidos como "marihuana" limitan de forma injustificada el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

- LIX. Lo anterior, toda vez que la Primera Sala "considera que se trata de una medida que no sólo innecesaria, al existir medios alternativos igualmente idóneos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que además es desproporcionada en estricto sentido, toda vez que genera una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar."³²

Derecho a la Salud

- LX. Para el caso particular de realizar distintas actividades relacionadas con el consumo de cannabis que no afectan a terceros, no existe razón para imponer penas privativas de libertad.

- LXI. Toda vez que para este caso únicamente se ve involucrada la salud individual, no estamos en presencia de un tema de salud pública que represente un riesgo tan grande para la población que involucre la intromisión del derecho penal para protegernos.

³⁰ Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de noviembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Oguín.

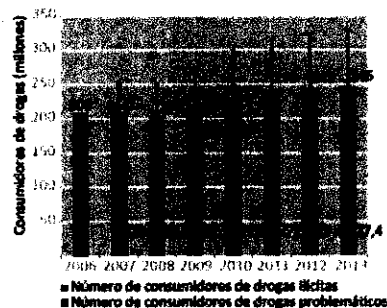
³¹ Ibidem.

³² Engorse del AMPARO EN REVISIÓN 237/2014 P. XXIV

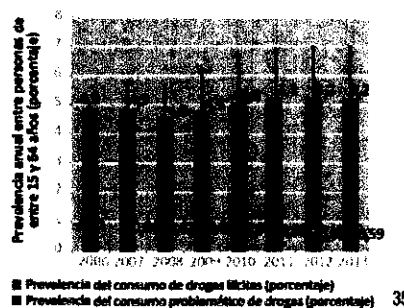
³³ Madrazo Lajous, Alejandro. "Drogas y derecho a la salud." Rodolfo Vázquez (comp.), ¿Qué hacer con las drogas (2009): 131-154.

- LXII. Debemos recordar que no todo consumo de drogas significa necesariamente un consumo problemático. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aproximadamente 1 de cada 10 consumidores de drogas sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia.³⁴

Tendencias mundiales del número estimado de consumidores de drogas, 2006-2013



Tendencias mundiales de la prevalencia estimada del consumo de drogas, 2006-2013



- LXIII. Por lo tanto, en caso de estar en presencia de un consumo problemático que conlleve farmacodependencia, el estado lejos de establecer algún tipo de pena debe facilitar el acceso al tratamiento de la adicción.
- LXIV. Toda pena privativa de libertad, por lo menos en nuestro país, se encuentra en conflicto con una disposición cuya finalidad jurídica sea la tutela del derecho a la salud. Nuestro sistema penitenciario conlleva problemas debido a la saturación y limitaciones presupuestales que, como consecuencia, se traducen en daños a la salud física y psicológica que a menudo desemboca en un mayor uso y abuso de drogas por parte de los reos en reclusión.
- LXV. Por lo tanto, la conclusión sobre las conductas que no involucran la afectación de otro bien jurídico o derechos de terceros es que "la pena que más protege es la que mejor informa acerca de los riesgos de la salud" y no penas que por su simple aplicación –como la privación de la libertad– dañan más a la salud que la sustancia por sí sola de la que nos intenta proteger la normatividad creada por el legislador.

i) Justificación con base en razones constitucionales

- LXVI. Al respecto, existen obligaciones a cargo del legislador plasmadas en el texto constitucional de emitir normatividad que tutele tanto el derecho a la salud³⁵ como el orden público.

³⁴ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, "Informe Mundial Sobre Las Drogas y el Delito 2015, Resumen Ejecutivo". Disponible en https://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_S.pdf (Consultado el 31 de Marzo de 2017)

³⁵ Respuestas al cuestionario para los informes anuales de la UNODC. Nota: Las estimaciones corresponden a la población adulta (entre 15 y 64 años) y se han elaborado sobre la base del consumo del año anterior.

³⁶ Artículo 73 Fracción XXX en relación con el artículo 4° Constitucionales.

- LXVII. Para el caso concreto del derecho a la salud, existen las siguientes obligaciones por parte del estado de acuerdo con el orden constitucional y los tratados internacionales³⁷ aplicables a la materia: (a) respetar; (b) proteger; (c) garantizar, y (d) difundir.
- LXVIII. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.
- LXIX. Por lo tanto, al amparo tanto del mandato constitucional como de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, los legisladores tienen no sólo la potestad, sino la obligación de emitir normatividad enfocada en la tutela efectiva del derecho a la salud.
- LXX. El verdadero cuestionamiento radica en que, como se ha mencionado en párrafos anteriores, no ha cumplido su finalidad de manera exitosa y actualmente no existen indicios de una tendencia clara a alcanzarlo.
- LXXI. Por lo tanto, sugerimos el replanteamiento de esta porción normativa con la finalidad de reajustar el sistema hacia una nueva política en materia de salud que tome en cuenta tanto la evidencia científica como la experiencia internacional con la finalidad de reducir daños de manera más eficiente de lo que actualmente implica la normatividad absolutamente prohibitiva.

Consideraciones Importantes

- LXXII. Del análisis realizado a lo largo del presente documento, concluimos que no se cumple con los elementos contenidos en el principio de proporcionalidad por las siguientes razones:
- a. **Persecución de finalidades legítimas desde la óptica constitucional.**
La totalidad de la normatividad analizada que penaliza toda actividad relacionada con el cultivo del Cannabis fue justificada desde su creación bajo el mandato de proteger la salud y el orden público. Sin embargo, esto parece más un pretexto para realizar el despliegue del aparato coercitivo del estado en su modalidad más invasiva y violenta, ya que a través del diseño de políticas públicas articulado actualmente el resultado, a pesar de las buenas intenciones del legislador, ha generado mayores daños directos e indirectos tanto a la Salud (a través de la violencia, persecución, encarcelamiento y desinformación) como al orden público (A través de enfrentamientos militarizados directos, estigmatización, violaciones al debido proceso y a derechos humanos).
 - b. **Adecuación, idoneidad y aptitud.**

³⁷ Apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".

Al día de hoy, después de más de una década de una guerra declarada de manera frontal en contra del narcotráfico, se cuentan con elementos suficientes para afirmar que la medida adoptada por el legislador no cumple con los principios de Adecuación, Idoneidad y Aptitud. La normatividad planteada desde el derecho penal ha demostrado que no responde a la problemática para la que fue planteada: contribuir a la protección de la salud y el orden público. Finalmente, al ser una medida tan invasiva y articulada de una manera tan violenta, no resulta apta al ser comparada con otras medidas de reducción de daños implementadas por diversos países y que se encuentran vigentes actualmente.

c. Susceptibilidad para alcanzar su fin.

La proyección de los datos compilados y analizados a lo largo del presente documento permiten inferir que las medidas vigentes dictadas por el legislador y que son materia del presente juicio, lejos de tender a la realización de la finalidad para la que fueron creadas, nos está alejando de la misma, con la fatalidad adicional de que en el lapso en el que se encuentran vigentes existen violaciones directas a los derechos humanos que se pretendían proteger al momento de su creación (derecho a la salud y debido proceso).

d. Necesidad y suficiencia para lograr su finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado.

El legislador, al elegir el derecho penal como la vía para proteger el derecho a la salud y el orden público, ha optado por la medida más invasiva. Lamentablemente, los derechos fundamentales que han sufrido colisiones al ser mermados en favor de la protección del derecho a la salud y el orden público, son diversos: el mismo derecho a la salud, debido proceso, derecho a la intimidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la información, derechos laborales, libertad de tránsito, entre otros.

Tantas violaciones en contra de tantos derechos humanos de una manera tan drástica y reiterada como resultado de la aplicación de las normas hoy impugnadas representan a todas luces una carga desmedida, excesiva e injustificada para quien acude hoy buscando el amparo de la justicia de la unión. Lo anterior resulta incluso más evidente cuando no se cumple la finalidad para la que fueron creadas las leyes hoy impugnadas y claramente, no existe una tendencia hacia su cumplimiento.

LXXIII. La SCJN hoy en día desempeña el papel de Tribunal Constitucional, por lo que de acuerdo a lo expresado por el Ministro José Ramón Cossío Díaz³⁸, consideramos que los efectos de una sentencia de amparo en relación con la política absolutamente prohibitiva en materia de drogas no debe limitarse a expresar únicamente solo los efectos concretos, sino también considerar las medidas exhortativas de carácter estructural que garanticen:

- a. Evitar la violación de los derechos humanos de los gobernados
- b. Enfocar el problema desde el punto de vista de la salud pública
- c. Ajustar todo el esquema de la prohibición sancionada penalmente al de la legalización regulada bajo los parámetros generales de la salud pública y la protección de los derechos humanos de los consumidores y no consumidores.

LXXIV. En materia internacional, el Ministro Cossío ha advertido la obligación que se ha establecido en el sistema interamericano de Derechos Humanos sobre la obligación de reparación contenida en el

³⁸ VOTO CONCURRENTES DEL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN AMPARO EN REVISIÓN 237/2014

artículo 63.1 de la CADH, Misma que entraña el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias a fin de que hechos similares no se vuelvan a repetir y a contribuir a su prevención.

- LXXV. Como consecuencia, este Alto Tribunal cuenta con la obligación de identificar y después exhortar a todas las autoridades del Estado a adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole, que fueran necesarias para hacer efectivo el ejercicio pleno de los derechos humanos de todos los gobernados.
- LXXVI. Por ejemplo, se identifica la necesidad de exhortar al "Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de sus atribuciones, realice una revisión de todos los ordenamientos legales relacionados con la política prohibicionista del Estado en materia de drogas."³⁹ y en consecuencia "Exhortar al Poder Ejecutivo Federal y a su Administración Pública, para que elabore un programa nacional en el que se fijan los objetivos, metas, estrategias y prioridades para delinear una política pública integral en materia de drogas. Asimismo, para que lleve a cabo la adecuación de los reglamentos correspondientes una vez que el Congreso de la Unión haya expedido las reformas relativas, con el objeto de incluir el uso recreativo de la marihuana."⁴⁰

Por lo antes expuesto, a Ustedes Señoras y Señores Ministros de la SCJN, de manera atenta solicitamos:

PRIMERO. Tengan por admitido y se realicen los trámites correspondientes para anexar el presente *Amicus Curiae* en el expediente correspondiente.

SEGUNDO. Tomen en cuenta las consideraciones plasmadas a lo largo del documento al momento de realizar su voto relacionado con la sentencia de mérito.

TERCERO. Determinen, en el momento procesal oportuno, la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, así como los demás que se encuentren relacionados producción, uso y autoconsumo del estupefaciente "cannabis" y el psicotrópico "THC", en conjunto conocidos como "marihuana". por ser violatorios de Derechos Humanos contenidos en la CPEUM, así como los tratados internacionales en la materia.

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

³⁹ Idem P. 22

⁴⁰ Idem P. 25

000000

[REDACTED]

(LSE)

John A. [Signature]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

007712

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2010 FEB 22 PM 12 39

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO

en 16/7/10

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 1815212

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARISOL MARTÍNEZ MARTÍNEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	MAMM830701MDFRRR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000d36	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/02/2018T21:28:57Z / 22/02/2018T15:28:57-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	6f 57 7f ff 92 47 b1 b4 3b b7 0c d5 14 14 5c 65 21 0d 29 cd ab ad b0 27 4d d5 97 55 30 75 47 fb 1d e6 49 83 3f 52 98 7c 7f f5 03 e5 01 70 ba f3 40 8c 53 fd 6b f4 a9 e9 d3 b0 2c 91 09 fe c0 83 fc 45 04 71 71 0b b4 e2 1a 77 4b d7 21 83 d5 48 bf 47 19 5a 84 ce 43 e6 58 96 43 5d 65 b5 61 7d fd 56 4b 6e a9 84 c5 fc 14 79 d4 02 cd ac 90 71 ce c5 23 4c 66 6f 26 84 fe 4a 3e 9b e7 8c c7 b8 f7 f1 19 52 91 bf 1d b5 cd 5e 07 89 d5 6f 66 37 d5 1b 1c 69 4f 92 58 29 17 b3 b1 1c db 2e 70 6a 77 75 cc 4b bf b5 a2 12 f4 ad de d4 a9 b8 8b 2f bb 05 73 25 5e 60 71 07 b1 7e 02 90 54 79 18 9a 89 f5 72 3a 01 e3 6f 72 28 af 04 86 9e 48 72 56 9e 48 34 6a ba df dd 3b 20 6e ab 11 d6 49 35 ec 47 6d 6a 00 a6 ec 6b a3 9b 72 a7 1f d2 62 47 83 8a 14 5c 65 58 24 94 d1 42 ae 4e 4b fc 0a 33 aa			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/02/2018T21:28:58Z / 22/02/2018T15:28:58-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e0000000000000000000000d36			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/02/2018T21:28:57Z / 22/02/2018T15:28:57-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1817898			
	Datos estampillados:	2A3E1A4C281C29AA6B2EC9AACF25E7AB0E9C3FB3			